Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Ref.: AL HND 8/2021

(por favor, utilice esta referencia en su respuesta)

6 de enero de 2022

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de conformidad con las resoluciones 43/16, 46/7, 43/4 y 41/12 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la posible utilización indebido del derecho penal en contra del defensor de derechos humanos **Fabio Almendarez Pereira**, en el contexto de reformas al Código Penal aprobadas el 7 de octubre de este año, que presuntamente estaría vinculada con su labor de defensa de la tierra y territorio en el departamento de Valle.

El Señor Fabio Almendarez Pereira es un pescador y defensor del medio ambiente que integra la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). ADEPZA, creada en 2005, es una organización que protege el derecho al desarrollo sostenible en el municipio costero de Amapala, departamento de Valle, y que cuenta con 320 familias en 12 comunidades. La organización tiene un amplio historial de defensa de los derechos a la tierra y territorio y de resistencia ante la proliferación de proyectos de desarrollo que afectan el medio ambiente.

Según la información recibida:

ADEPZA reporta que desde su creación al menos 120 de sus miembros habrían sido víctimas de criminalización vinculada con su defensa de la tierra y territorio; en más de la mitad de los casos la acusación habría sido por el delito de usurpación. Asimismo, en distintas ocasiones habrían sido víctimas de desalojos violentos.

Excelentísimo Señor
Lisandro Rosales
Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional

El 5 de noviembre de 2021, los representantes legales de la sociedad mercantil denominada inversiones Kiel S.A. de C.V. (KIELSA) habrían presentado una querrela en contra del Señor Almendarez Pereira, por suponerlo responsable del delito de usurpación en su modalidad de alteración de linderos (artículo 378, numeral 1 del Código penal, reformado según decreto 93-2021). En particular se habría alegado que el lugar donde el Señor Almendarez Pereira tiene su vivienda corresponde a un lote de terreno ubicado en el lugar denominado Las Islitas, adquirido el 25 de agosto de 1996 por KIELSA. A través de esta querrela se habría solicitado la aplicación de la figura de desalojo preventivo.

El Señor Fabio Almendarez Pereira refiere haber vivido en el terreno en conflicto por más de 30 años, en una pequeña vivienda. Se entiende que su casa tiene una gran importancia para su comunidad en la medida en que sirve como punto de salida de las lanchas que los comuneros utilizan para la pesca, su principal medio de subsistencia. Asimismo, es un lugar donde reparan lanchas, redes de pesca y donde realizan recolección de almejas.

Esta sería la segunda vez en la que el Señor Almendarez Pereira habría sido acusado por la presunta comisión del delito de usurpación en el mismo lugar. En 2009 fue inicialmente detenido, pero el proceso fue objeto de sobreseimiento provisional cuando no se habrían podido comprobar los hechos por los cuales se le acusaba. En 2016, el caso fue de nuevo abierto con dos testigos presentados por el Ministerio Público y el Señor Almendarez Pereira fue eventualmente condenado. Sin embargo, el desalojo ordenado no se llevó a cabo porque se habría constatado que la vivienda del Señor Fabio Almendarez Pereira no estaba sobre el terreno en conflicto.

Vínculo con las Reformas al Código Penal

El 1 de noviembre se publicó un paquete de reformas legislativas aprobadas el día 7 de octubre por el Congreso Nacional, que ampliarían de manera sumamente preocupante el ámbito de aplicación del tipo penal de usurpación, crearían nuevas agravantes para el mismo y le asociarían la modalidad de desalojo preventivo sin control judicial. Adicionalmente, la pena por el delito de usurpación habría aumentado de un rango de 2-4 años a 4-6 años de reclusión. Esto conlleva que el delito de usurpación se considera como un delito grave, por tener una pena grave.

La admisión de esta querrela por el delito de usurpación agrava la situación de criminalización de personas defensoras de la tierra y territorio, en la medida en que se admite una tramitación expedita, al habilitar la conversión de una acción penal pública – en la que está prevista la intervención del Ministerio Público – a una acción privada, en cuál únicamente comparece la parte afectada ante el órgano jurisdiccional sin la intervención del Ministerio Público. El proceso de la querrela, a diferencia de los procesos penales ordinarios, además elimina las etapas preparatorias e intermedia del proceso penal, acortando la duración del proceso y pudiendo resultar en una sentencia definitiva de forma más expedita.

Constituiría un precedente también la aplicación de la figura de desalojo preventivo introducida por las reformas de 7 de octubre, que permitiera que el

Juez ordene el desalojo preventivo del inmueble de manera inmediata, otorgando provisionalmente la posesión al denunciante que acredite con indicio racional su propiedad.

Sin prejuzgar de antemano la exactitud de los hechos presentados, expresamos nuestra profunda preocupación ante los alegatos de criminalización expedita del Señor Fabio Almendarez Pereira, lo que parece estar relacionado con su trabajo como defensor los de derechos humanos y la resistencia comunitaria de los pescadores de Amapala.

Asimismo, nos preocupa que la organización ADEPZA reporte reiterados ataques en contra de sus miembros, desde su creación en 2005, en particular a través de la utilización indebida del derecho penal. Es sumamente preocupante que, de ser verificados estos hechos, se muestran un posible contexto en que las personas defensoras del medio ambiente sean víctimas de distintos tipos de ataques, incluida la criminalización, produciéndose un efecto amedrentador que inhibe la defensa de los derechos humanos por miedo a eventuales represalias.

Finalmente, quisiéramos destacar nuestra preocupación ante el posible establecimiento de precedentes de criminalización expedita mediante la admisión de una tramitación prevista para delitos de instancia privada y de la aplicación de la figura de desalojo sin un procedimiento de contradictorio.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvanse proporcionar información sobre los pasos que ha dado o dará el Gobierno para asegurar la compatibilidad de las reformas arriba mencionadas con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras.
3. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas de protección y prevención adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para asegurar que las personas defensoras de derechos humanos, incluidos campesinas, indígenas, y las y los defensores de la tierra y territorio, puedan ejercer libremente su labor, sin temor a cualquier represalia, amenaza, persecución penal, acto de intimidación o agresiones.
4. Sírvase explicar de manera detallada, por qué el Sr. Almendarez Pereira, que al parecer ha vivido legalmente durante 30 años en su parcela y su casa, que fue acusado dos veces de haber cometido el delito de

usurpación, y que fue absuelto dos veces por un tribunal (en 2009 y 2016), es ahora objeto de una acusación similar y corre el riesgo de ser expulsado de su tierra y su casa, y privado -él y su comunidad- de su sustento.

5. Sírvase aclarar el base fáctico y jurídico de este nuevo procedimiento contra él y su comunidad, especialmente a la luz del principio crítico de irretroactividad de una ley, y cómo esto es compatible con las obligaciones de derechos humanos de Honduras en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado.
6. Sírvase proporcionar información detallada sobre la justificación de la reforma del código penal aprobada el 7 de octubre de 2021, en lo que respecta a la protección de los derechos territorios, incluidos la propiedad, la tenencia y el uso. Las modificaciones parecen ampliar el ámbito de aplicación del delito penal de usurpación, crear nuevas circunstancias agravantes para el mismo y asociarlo al desalojo preventivo sin control judicial, y aumentar la pena correspondiente de 2 a 4 años a 4 a 6 años de reclusión. Esto significa que el delito de usurpación se considera un delito grave, ya que conlleva una pena grave. Por favor, aclare cómo esta reforma es compatible con el deber del Estado de Honduras de proteger el derecho a la tierra y a los medios de subsistencia según el PIDESC ratificado por Honduras el 17 de febrero de 1981.
7. Además, sírvase explicar si esta reforma, que afecta a los derechos fundamentales a la tierra, la vivienda y los medios de subsistencia, ha sido objeto de una consulta con la participación efectiva de las comunidades interesadas, mediante un proceso transparente de adopción de decisiones, y de qué manera. A este respecto, los principios del derecho internacional de los derechos humanos subrayan la importancia de respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas cuyos derechos, medios de vida y, en algún momento, supervivencia, están afectados.

Agradeceríamos recibir una respuesta en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona y la organización mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Mary Lawlor

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

David R. Boyd

Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible

Irene Khan

Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Clement Nyaletsossi Voule

Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con los hechos y preocupaciones anteriormente detallados, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables a los mismos.

Quisiéramos referirnos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al cual Honduras accedió el 25 de agosto 1997, a los artículos 9, 14, 19 y 22 que garantizan la libertad y seguridad personal, a un recurso efectivo, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Recordamos al Gobierno de su Excelencia que estas obligaciones implican no sólo el respeto directo por parte de todas las autoridades del Estado a dichas libertades, sino también la protección contra los actos de particulares o de entidades privadas que impidan o limiten su disfrute.

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por otra parte, el artículo 6 b) y c), establece el derecho a publicar, impartir o difundir libremente información y conocimientos sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a estudiar, debatir y opinar sobre la observancia de estos derechos. Además, el artículo 8.2, establece que todas las personas, individualmente o en asociación con otras, tienen derecho a presentar a las autoridades gubernamentales críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Aunado a lo anterior, quisiéramos referirnos al artículo 12, párrafos 2 y 3, de la declaración estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

Por último, el 8 octubre 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 48/13 reconociendo el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Además, los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, presentados al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018 (A/HRC/37/59) establecen las obligaciones básicas de los Estados en virtud de las normas de derechos humanos en lo que respecta al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. El Principio 4 establece que “Los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y los órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o las cuestiones ambientales puedan actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia.”